

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 11 de diciembre de 2020

Auto Interlocutorio No. 128

**MAGISTRADO PONENTE: OSCAR A. VALERO NISIMBLAT**

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-000-2019-00986-00
DEMANDANTE:	ARMANDO RODRÍGUEZ GARZÓN
DEMANDADO:	CASUR
ASUNTO	REPOSICIÓN DE AUTO – REVOCA AUTO QUE REMITE POR COMPETENCIA

Aprobada en Sala y Acta de la fecha. Convocatoria No. \_\_del.

**I. OBJETO DE LA DECISION**

Se resuelve el recurso reposición propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio nro. 12 del 20 de enero de 2020 proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la falta de competencia en razón de la cuantía para tramitar el presente proceso y ordenó remitirlo a los juzgados administrativos de Cali (reparto).

**II. ANTECEDENTES**

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor Armando Rodríguez Garzón solicito la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Resolución nro. 5006 del 13 de septiembre de 2019 “Por la cual se revoca en todas sus partes las Resoluciones nros. 004775 del 14-07-2019, 002510 del 04-05-2017 y se declaran deudores de la entidad para el reintegro de valores...” y el Oficio nro. 20123000199031-Id. 467376 del 01 de agosto de 2019.
- Resolución nro. 9148 del 31 de julio de 2019 “Por la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra la resolución nro. 5006” y el oficio nro. 2019230002448801 del 5 de abril de 2019”.
- Resolución nro. 10084 del 16 de agosto de 2019 “Por la cual se reconoce y ordena el pago de asignación mensual de retiro, en cuantía equivalente al 91% al señor AG ® Rodríguez Garzón Armando” y oficio nro. 201923000244951 del 16 de agosto de 2019.
- Resolución nro. 11479 del 4 de septiembre de 2019 “por medio de la cual se modifica la resolución 10084 del 16 de agosto de 2019”.



Como restablecimiento del derecho solicitó que se declare que el señor Armando Rodríguez Garzón no es deudor del tesoro público, por la suma de \$219.181.845 pesos, por concepto de asignación mensual de retiro pagado entre el 25 de agosto de 2007 y el 31 de diciembre de 2018.

### III. DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA :

Mediante auto interlocutorio nro. 12 del 20 de enero de 2020 proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca<sup>1</sup> que declaró la falta de competencia en razón de la cuantía para tramitar el presente proceso y ordenó remitirlo a los juzgados administrativos de Cali (reparto), al considerar:

*“En el presente asunto, la parte demandante estimó la cuantía en \$219.181.845 que corresponden al valor que se le ordenó reintegrar a la entidad demandada por concepto de asignación de retiro que le fue pagada entre el 2007 al 2018, valor que resulta inferior a los 300 SMLMV, por lo que debe darse aplicación al numeral 4 del artículo 155 del CPACA y la competencia para conocer en primera instancia el presente asunto radica en los juzgados administrativos.*

*Por lo anterior, en el presente caso debe aplicarse el numeral 3 del artículo 155 del CPACA y en consecuencia, la competencia para conocer en primera instancia el presente asunto radica como se indicó en los juzgados administrativos del Circuito Judicial de Cali por lo que se remitirá el expediente para lo pertinente.*

*Así entonces, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168 del CPACA se ordenará como ya se indicó remitir el expediente por competencia a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali, quienes deberán observar el inciso tercero del artículo 139 del CGO aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA”.*

### IV.FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte demandante solicitó que se revocara el auto recurrido y en su lugar, el Tribunal Contencioso Administrativo conozca del presente asunto, argumentado<sup>2</sup> lo siguiente:

*“... Casur pagó la asignación de retiro de mi prohijado desde el 25-08-2007 hasta el 31-12-2018 como justa contraprestación de un derecho prestacional del trabajador policial por haber laborado más de 16 años de servicio en la Policía Nacional.*

*La policía Nacional ordeno el reintegro al servicio activo de la Policía Nacional y como consecuencia de lo anterior, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ordena embargar y descontar de la asignación de retiro, lo pagado por la Caja entre el 25-08-2007 y el 31-12-2018, la suma de (\$219.181.845) pesos, como suma de las mesadas canceladas en la fecha ibídem.*

*Los actos administrativos demandados, por lo cual, la Caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional ordena embargar y descontar de las mesadas pensionales, derecho prestacional surgido de la relación de trabajo entre mi prohijado el Agente ARMANDO RODRÍGUEZ GARZÓN y la Policía Nacional, la suma de (\$219.181.845), se enmarcan dentro de lo determinado en el CPACA, así:*

---

<sup>1</sup>Ver folio 117-122

<sup>2</sup> Folio 66 del expediente.



*“Artículo 152...*

*“Conforme a lo anterior considero su señoría que usted, si es el competente, para conocer del proceso de la referencia en primera instancia, por cuanto en caso subexamine es un proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho de CARÁCTER LABORAL.*

*En las demandas de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter laboral, contra las cuales, no es preciso adelantar conciliación prejudicial en la Procuraduría administrativa como tramite de prejudicialidad para imponer la acción.*

*“ ...*

*“Los Actos administrativos demandados, en el caso subexamine de nulidad y restablecimiento del Derecho de carácter laboral, surgieron de una relación laboral entre la Policía Nacional, mi prohijado el Agente ® FERNANDO RODRÍGUEZ GARZÓN y la entidad CASUR, que cumple las obligaciones prestacionales surgidas entre las partes y el embargo y secuestro ordenados por CASUR son prestaciones sociales surgidas de unas acreencias laborales, lo cual determina conforme a esas características que nos encontramos ante una demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral, la cual se encuentra enmarcada dentro de las competencias del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en el numeral 2 del artículo 152.”*

## **V. CONSIDERACIONES:**

### **5.1 Competencia**

De conformidad con el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho es competente para conocer del recurso de reposición presentado por el apoderado judicial de la parte demandante contra el auto nro. 12 del 20 de enero de 2020. La norma en comento prevé:

***“Artículo 242. Reposición.** Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil”.*

### **5.2 Problema Jurídico**

En atención al recurso de reposición interpuesto, corresponde al Despacho analizar nuevamente si por razón de la cuantía el conocimiento del presente asunto corresponde a los Juzgados Administrativos de Cali o al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

### **5.3 Caso Concreto**

En el presente asunto, el apoderado judicial del señor Armando Rodríguez Garzón, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación consagrado en el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el auto del 12 del 20 de enero de 2020, por medio del cual declaró la falta de competencia en razón de la cuantía para tramitar el presente proceso y ordenó remitirlo a los juzgados administrativos de Cali (reparto).

Dicha norma contempla:



**“Artículo 242. Reposición.** Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil”.

Por lo tanto, para determinar si el presente recurso es procedente, es necesario verificar si el auto por medio del cual se declaró la falta de competencia en razón de la cuantía es susceptible de apelación, para lo cual debe tenerse en cuenta que dichos autos están consagrados en el artículo 243 de dicha normativa, en la siguiente forma:

**“ARTÍCULO 243. APELACIÓN.** Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.
2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.
3. El que ponga fin al proceso.
4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.
5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.
6. El que decreta las nulidades procesales.
7. El que niega la intervención de terceros.
8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.
9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia.

“El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.

**PARÁGRAFO.** La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil”.

De la norma transcrita, puede advertirse claramente que el auto recurrido no se encuentra contemplado como aquellos contra los cuales procede el recurso de apelación, así como tampoco se encuentra que el mismo sea susceptible de súplica, la cual procede contra aquellos autos que por su naturaleza serían apelables<sup>3</sup>, proferidos por el magistrado ponente en segunda o en única instancia; por tal razón es menester concluir que sólo es susceptible de recurso de reposición. Por tanto, en el presente asunto el Despacho no dará trámite al recurso de apelación radicado por el demandado.

---

<sup>3</sup> “ARTÍCULO 246. SÚPLICA. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.

Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda.

El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por dos (2) días a disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el Secretario pasará el expediente al Despacho del Magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el ponente para resolverlo ante la Sala, sección o subsección. Contra lo decidido no procederá recurso alguno”.



Visto lo anterior, y para pronunciarse de fondo sobre el presente asunto, se reitera que el demandado radica su inconformidad en el hecho de que el Tribunal Contencioso Administrativo por cuantía debe conocer del presente asunto y no los juzgados administrativos.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 155 numeral 2º de la Ley 1437 de 2011, los Jueces Administrativos son competentes para conocer en primera instancia, entre otros asuntos, *“...2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes...”*.

Y según el artículo 152 Ibídem, es competencia de los Tribunales Administrativos conocer en primera instancia, entre otros asuntos, *“2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes...”*.

Por su parte, el artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece las reglas para determinar la competencia en razón de la cuantía, dispone la norma:

*“Art. 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.*

*“Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.*

*“En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.*

*“La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos; intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.*

*Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años”.*

De conformidad con lo anterior, para que los Juzgados Administrativos conozcan de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho – laboral, la cuantía no puede exceder de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



En virtud de lo expuesto, al ser el presente asunto de índole laboral, ya que la administración a través de los actos administrativos demandados revocó la resolución que reconoció la asignación mensual de retiro del señor Agente ® Rodrigo Garzón Armando, y según la estimación de la cuantía que se hace en la demanda<sup>4</sup>, \$219.181.845 M/cte, suma que supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, establecidos por la ley como tope para que los Juzgados Administrativos conozcan de este tipo de medio de control, de conformidad con el numeral 2º del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, la competencia funcional del presente asunto corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo en virtud a lo dispuesto en numeral 2 del artículo 152 del CPACA .

En vista de los anteriores argumentos, el Despacho repone para revocar el auto No. 12 del 20 de enero de 2020, por medio del cual declaró la falta de competencia en razón de la cuantía para tramitar el presente proceso y ordenó remitirlo a los juzgados administrativos de Cali (reparto).

Suficiente lo expuesto, se

### RESUELVE

**PRIMERO: REPONER PARA REVOCAR**, el Auto No. 12 del 20 de enero de 2020.

**SEGUNDO:** No darle trámite al recurso de apelación interpuesto contra la providencia No. 12 del 20 de enero de 2020, proferido por este Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

**TERCERO:** En firme esta providencia, continúese con el trámite correspondiente.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,**

El Magistrado

**OSCAR A. VALERO NISIMLAT**  
**Magistrado**

---

4 Folio 18 del expediente.  
Vo.Bo.Secretario.  
Nathaligg